

MAS GASTO EN LA GUERRA QUE INVERSIÓN PARA LA PAZ

La sociedad colombiana gasta anualmente \$1'028.951'000.000, en vigilancia privada, autodefensas y seguros, para protegerse de las secuelas del enfrentamiento. Diariamente el conflicto guerrilla-Estado ocasiona pérdidas y sobrecostos millonarios. A la ganadería, \$1.994'000.000; al INPEC, \$21.700'000.000; a la industria, por concepto de robos al transporte de carga por carretera, \$41'000.000; al sector productivo, por inversión en paramilitarismo, \$146'739.726; y \$65'753.424 por concepto de celaduría y vigilancia privada. Además, cada día, en la presente década, 35 agricultores perdieron sus trabajos y 164 colombianos fueron desplazadas de sus lugares de vivienda por motivos relacionados con la violencia. Sólo durante la Administración de César Gaviria, murieron ciento diez personas al mes por móviles políticos en Colombia.

Por César Aguirre

Las dos últimas generaciones nacidas en nuestro país han cargado sobre sus hombros el peso de la violencia política. Pese a lo que se pueda pensar, esta carga, cada vez más pesada, se torna en liviana cuando el paso del tiempo la hace una costumbre. Cualquier colombiano de más de quince años recuerda por lo menos cinco hechos representativos del conflicto interno que vivimos; los ejemplos sobran: la muerte a manos de sicarios de líderes como Luis Carlos Galán, Jaime Pardo, Carlos Pizarro o Rodrigo Lara, entre otros. La masacre de La Chinita, o las muchas perpetradas en Urabá también están presentes en el recuerdo de nuestros jóvenes.

La doctrina de Seguridad Nacional, implantada durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala -pese a que su institucionalización se inició con el Plan Lazo, en 1962-, limitó el accionar de las pocas propuestas de paz que antecedieron a las planteadas a partir del mandato de Belisario Betancur.

La guerra se ha convertido en una forma de vida, aún cuando los últimos cuatro gobiernos han mostrado ante la opinión pública su deseo de consolidar la paz, cada vez invierten más dinero en los elementos para hacer la guerra. Las bases establecidas a lo largo del presente siglo, todas en función de acelerar los procesos bélicos, parecen difíciles de romper. La insoslayable meta de triunfo entre los contendientes de turno, nunca ha permitido el desarrollo de las metas de estabilidad social. Entre tanto, el resto de la nación continúa tratando de encontrar escapes unitarios.

A través de las dos última décadas el gasto militar en Colombia, entendiéndolo exclusivamente como ministerio de Defensa y Policía, ha crecido en un promedio anual de 32 por ciento al pasar de \$7049 en 1975 a \$1'812.143.056.630 en 1995 -el incremento anual del PIB entre 1990 y 1994 fue de 4.3 por ciento-.

Pese a que la participación de los gastos del ministerio de Defensa y de la Policía en el total del presupuesto de la nación ha pasado de 15 por ciento en 1975 a 10.3 en este año, si se incluye en el total de inversiones las destinadas a las entidades adjuntas a las

FFAA, el porcentaje en 1995 se eleva a 13.4; y si se suman los dineros manejados por el DAS, dicha participación se incrementa hasta 13.8 por ciento. Además, teniendo en cuenta el valor agregado por el servicio de deuda externa, el total por cien en cada año aumenta cerca de dos puntos.

Los organismos encargados de establecer las metas globales en cuanto al gasto militar son los ministerios de Defensa y Desarrollo, y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-; no obstante, la comunicación existente entre estas instituciones es mínima, por lo que se impide una coordinación valedera que fomente el buen manejo de los fondos destinados a la seguridad.

De esta manera, las pérdidas y sobrecostos que los gremios económicos se ven obligados a asumir, como consecuencia de la inoperancia efectiva de los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad encuentran su "justificación"; ese factor hizo que el Estado tuviera que avalar en determinado momento el surgimiento de grupos armados de carácter civil -paramilitares- y dar rienda suelta a la conformación de diferentes empresas de vigilancia privada.

Sin embargo, la mayor de las pérdidas pocas veces es contabilizada como factor de desestabilización social y aún más pocas por su influencia en el desarrollo económico. Como es de todos sabido, Colombia tiene uno de los más altos niveles de muerte por homicidio en el mundo; en 1980 murieron asesinadas en nuestro país cerca de diez mil personas, en 1988 veinte mil y el año anterior la cifra se apróximo a los treinta mil. Durante el gobierno de César Gaviria murieron 9.497 nacionales por motivos políticos y otros 5.538 lo hicieron como consecuencia de enfrentamientos armados -entre ellos 438 civiles, según la ONU-.

Pero, ¿cómo apartar la violencia de las montañas, de las bombas, de la fabricación de armas o de la delincuencia de cuello blanco, de esa otra violencia que surge en los hogares o en el barrio? ¿Cómo pensar que la desestabilidad del entorno no ocasiona cambios al interior de los individuos? ¿Cómo pueden los niños de las escuelas del Caquetá, el Cesar o el Guaviare pasar por alto lo que ocurre a su alrededor; el asesinato de sus padres o de sus maestros?

Al analizar los Años de Vida Potencial Perdidos -AVPP- en los habitantes de nuestro país, el complejo de muerte por violencia-accidentes se muestra como la más alta causa de deceso prematuro, con 39.9 por ciento de influencia; lo siguen a bastante distancia las enfermedades perinatales, con 13.3, y las transmisibles, con 12.2 por ciento. A partir de 1983 el factor exclusivo de violencia a aumentado notablemente, llegando a ocasionar más de 50 por ciento del total de fallecimientos por causas no clínicas o naturales, y cerca de 18 por ciento de todas las muertes de los colombianos incluidos en el grupo de edades de 15 a 40 años.

Es más, el mencionado complejo toma mayor importancia si, por ejemplo en 1991 se excluyen los 900.000 años perdidos que aportan las defunciones de los menores de un año, en ese caso violencia-accidentes llega a 51.2 por ciento del total de AVPP, las afecciones vasculares a 14.0, los tumores a 9.5, y las enfermedades transmisibles a 7.7 por ciento.

Para Dionisio Araujo, presidente de Fenalco Bogotá, "es imposible medir las ganancias que nuestro país deja de percibir a causa del miedo que los colombianos sienten cuando

dejan su hogar. Todo el mundo prefiere salir de vacaciones fuera del país, generando incalculables disminuciones en los ingresos de los comerciantes y del gobierno por concepto de impuestos no recibidos; solamente en la capital, donde el único factor de influencia decisiva es la delincuencia común, cada año los comerciantes pierden cerca de US\$728 millones por hurto e inversiones en seguridad”.

El mito del guerrero

El llegar a la paz representa un alto perjuicio para la economía del estamento militar, ya que la actual abundancia se vería mermada por los recortes a las partidas económicas destinadas a su funcionamiento.

Al mismo tiempo, 50 años después del surgimiento de las FARC, la guerrilla a consolidado varios negocios sumamente productivos, es el caso de la extorsión, el narcotráfico y el secuestro; anualmente, el cobro de impuestos a los cultivadores y productores de coca representa para la insurgencia, en especial para las FARC, ingresos por cerca de \$120.000 millones -la marihuana y la amapola les producen unos \$70.000 millones-. De acuerdo con las investigaciones de algunos expertos de la Universidad Nacional, únicamente el Frente Primero de las FARC, que actúa en la zona de Miraflores Guaviare, recibe semanalmente \$130 millones por concepto de impuestos sobre coca.

De esta manera, a la ya existente filosofía del guerrero, se suma como un factor primordial en el sostenimiento del conflicto el factor dinero. La paz se relega al cuarto de san Alejo, mientras que la guerra se sienta comodamente en la sala y duerme en las habitaciones de todos los colombianos.

La Ley de Presupuesto General de la Nación de 1995 determinó partidas de \$1'036.030'734.973 para los gastos generales del ministerio de Defensa; \$776.112'321.657 para los de la Policía Nacional; y \$54.892'894.000 para los del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. A estas cifras, escandalosamente elevadas por sí solas, deben agregarse los dineros dirigidos a las entidades descentralizadas que de una u otra forma efectúan actividades que están relacionadas con la defensa y seguridad, es decir la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, el Club Militar, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía, la Defensa Civil Colombiana y los fondos rotatorios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el DAS y la Policía.

En suma, las instituciones descentralizadas cuentan con un presupuesto de funcionamiento que asciende a \$542.997'764.100; de ellos, 67.6 por ciento corresponde al aporte nacional, mientras que 32.4 por ciento proviene de los recursos que ellas mismas administran.

Además de las entidades mencionadas, forman parte del ministerio de Defensa en calidad de empresas comerciales e industriales del Estado, sociedades de economía mixta, entidades anexas y unidades administrativas especiales: Industria Militar - Indumil-, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales -Satena-, Servicio Naviero Armada República de Colombia -Senarc-, Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana -Ciac-, Hotel Tequendama, Hotel San Diego S.A., Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares y Universidad Militar Nueva Granada. La Caja de Vivienda Militar no aparece

dentro del Presupuesto de las F.F.A.A. en 1995, pero a partir de mayo de este año empezó a recibir 3 por ciento del total de sus gastos de funcionamiento, que ascienden a \$180.787 millones, de parte del ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Una parte de las ganancias anuales de estas empresas va a parar a las arcas de las Fuerzas Militares, aumentando los dineros de que éstas disponen para incrementar su poder. Pese a ello, vale la pena tener en cuenta que no todas las actividades de dichas entidades atienden al funcionamiento de la fuerza pública, por lo que la unificación, a la hora de sumar el total de inversiones en defensa y seguridad, sobrestimaría la realidad.

Así, la condición de militar adquiere preponderancia por encima de la del ciudadano común, quien encuentra muchos más limitantes para subsanar sus necesidades básicas, es decir salud, vivienda, educación, recreación y, por encima de todo, vida.

Lo anterior se ratifica al revisar las inversiones del programa del Salto Social, bandera máxima de la actual administración. Para el período comprendido entre 1995 y 1998, el Estado destinó \$121.802 millones para la cultura, el deporte y la juventud; \$588.916 millones para las políticas de vivienda social urbana y de desarrollo urbano; \$359.528 millones para el Plan de Agua; \$400.864 millones para el sector agropecuario, y \$1'742.098 millones para el gasto total en salud. El Salto también invertirá \$1'015.000 millones en defensa y seguridad.

Los otros gastos

Se tiende a pensar que los costos que la nación tiene que "pagar" a causa del sostenimiento del conflicto guerrillero están cuantificados en la inversión destinada a los organismos de seguridad, pero se dejan por fuera del consolidado las pérdidas de las empresas privadas y estatales por concepto de ataques terroristas, hurto, secuestro, intangible de ganancias no conseguidas por el miedo general, retroceso en la producción agrícola y aumento en la importación de alimentos a causa de las migraciones campesinas y de la imposibilidad de las instituciones financieras para actuar en ciertas zonas del país, no inversión de las compañías extranjeras, pago de seguros por asalto y terrorismo, y contratación de compañías privadas de vigilancia.

Por ejemplo, a lo largo de los últimos años la Aeronáutica Civil ha tenido que comprar cuatro VORs, tres radares y dos radiofaros que fueron destruidos por la subversión, la inversión realizada por este concepto fue de US\$9'462.329.

Ecopetrol, como consecuencia de las voladuras en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ha perdido desde 1986 por reparaciones, descontaminación ambiental, y crudo derramado y dejado de producir US\$1'357.700; en el oleoducto Vasconia-Coveñas las pérdidas entre los años 1992 y 1995 llegan a US\$4404.

A Inravisión -pese a que estas pérdidas son asumidas por medio del seguro que protege sus posesiones- el terrorismo le ha costado \$167 millones. Telecom, a su vez, invirtió y dejó de percibir \$2.000 millones por los daños ocasionados por la guerrilla en la estación del cerro Tabor, en Cundinamarca, el 21 de mayo de 1994; y \$700 millones para poner nuevamente en funcionamiento la del cerro La Oca, en el sur del Cesar, el 30 de marzo de 1995.

Peajes S.A., firma que maneja la mitad de las casetas de cobro por tránsito vial en el país, afirma que a partir de la iniciación de su actual concesión, en octubre de 1993, la reparación de instalaciones dañadas por actos terroristas a costado \$80'768.366. Por su parte la Wackenhut de Colombia, que administra la mitad restante de los peajes nacionales sufrió seis atentados entre noviembre de 1992 y diciembre de 1993, por lo que debió invertir \$71'510.000 en reparaciones.

La Caja Agraria, al ser la entidad financiera con mayor número de oficinas en las regiones con influencia guerrillera, se ve duramente afectada. Desde el año anterior y hasta el presente, la Caja ha perdido cinco mil millones de pesos por ataques terroristas y robos perpetrados por la subversión. Al mismo tiempo, los campesinos ven mermada su capacidad de trabajo, pues el cierre temporal de las oficinas dificulta la compra de semillas, materiales y herramientas; en la actualidad, las sedes de la Caja en Mutatá - Antioquia-, Chita -Boyacá-, Gachalá -Cundinamarca- permanecen fuera de funcionamiento.

En el campo minero, si bien la situación de violencia no se contabiliza como una merma en la producción de los metales y piedras preciosas, las compañías extranjeras no han estado dispuestas a asumir los riesgos que representa la operación en Colombia. Sólo ocho por ciento de la producción nacional de oro es aportada por las empresas internacionales que laboran en nuestro país; una de ellas, la Frontino Gold Mines Ltd. gasta anualmente, en promedio, \$159'600.000 distribuidos en transporte de valores, escoltas, vuelos de helicóptero y seguros.

El resto de la extracción proviene de la actividad de los pequeños productores, quienes, a raíz de los métodos rudimentarios que emplean, pierden 40 por ciento de los beneficios reales estimados por Minerales de Colombia -Mineralco-.

En total, Colombia produjo 304'958.752.19 gramos de oro -en el resto de la explotación minera la influencia de la guerrilla es prácticamente inexistente- desde 1985 hasta 1994, a precio de junio 19 del presente año este metal tendría un valor de \$3''211.639'553.276; tomando en consideración que el 92 por ciento de este total, es decir \$2''954.708'389.014, es producido con 40 por ciento de provecho no obtenido, el supuesto de pérdida es de \$1''181.883'355.606. No obstante, aunque las empresas mineras de otros países optaran por trabajar en el nuestro su participación en la producción no abarcaría el total, pero si estaría cerca a la mitad de éste; así, el perjuicio real está cerca de los \$590.941'677.803, una parte de esta cifra ingresaría a las arcas de la nación por medio de impuestos de funcionamiento y otras tarifas que son fijadas por el ministerio de Minas a través del Mineralco.

De otro lado, según informaciones del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia - Inpec-, la población carcelaria del país en estos momentos, entre sindicados y condenados, asciende a 31.000 personas. De ellas, diez por ciento se encuentran privadas de la libertad por delitos como insurgencia, porte de explosivos, rebelión y asonada, que son tipificados como de origen subversivo. Cada preso le cuesta diariamente a la nación cerca de \$7.000, lo que quiere decir que los 3.100 reclusos considerados de alguna forma como guerrilleros representan un gasto de \$21'700.000 por día, o sea \$7.920'500.000 al año.

Todos pierden

“Los trabajadores y empresarios del campo no puede dedicar su talento a producir eficientemente, el absurdo guerrillero los obliga a emplear el tiempo y el dinero en la búsqueda de formas para defenderse. El Estado no asume eso, la distribución de riesgos no está equitativamente distribuida”; las palabras de César De Hart, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, reflejan la opinión general de quienes manejan desde los gremios la economía nacional.

El sector agropecuario es sin duda uno de los más afectados por la falta de control de las autoridades sobre la guerrilla. Se calcula que 600 municipios colombianos están en manos de la insurgencia, o por lo menos padecen los problemas que el conflicto genera; lo anterior ha obligado a los campesinos a emigrar de las zonas en las que laboraban, disminuyendo notablemente los niveles de producción año tras año.

Las organizaciones no gubernamentales internacionales y locales estiman que el número de campesinos desplazados internamente ha llegado a los 300 mil en el último lustro. En un informe dado a conocer por la ONU el 3 de octubre del pasado año, se afirma que únicamente el fenómeno de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, en abril de 1948, ocasionó la huida de dos millones de campesinos hacia los centros urbanos. La verificación de los datos se evidencia al contrastarlos con los habitantes que diariamente llegan a las grandes ciudades para ubicarse en los cinturones de miseria que las rodean. En suma, la población rural ha disminuido como consecuencia del enfrentamientos entre las fuerzas militares y la subversión 9.9 por ciento, mientras que la urbana ha aumentado 35 por ciento, generando un desequilibrio laboral poco conveniente para el sector agrícola.

De acuerdo con estudios de Fedesarrollo, el PIB agropecuario pierde entre 10.6 y 17 por ciento de su alcance anual como consecuencia de la guerra interna. En 1991 el país importaba algo más de 4 por ciento de sus requerimientos alimenticios, es decir 876.800 toneladas, para 1994 la cifra llegó a quince por ciento, o sea tres millones de toneladas; del mismo modo, la superficie dedicada a cultivos transitorios cayó de 2.3 a 1.9 millones de hectáreas, y se perdieron 50.664 empleos rurales directos y 18.910 indirectos. Además, asegura De Hart, “el problema principal es la disminución en la competitividad internacional que genera el conflicto entre ejército y guerrilla; los costos que podemos ofrecer a los compradores extranjeros aumentan y las mermas en la venta de productos únicamente son asumidas por nosotros”.

Para Jorge Bisbal Martelo, presidente de la Federación de Ganaderos -Fedegan-, “la efectividad de la fuerza pública está por demostrarse, las FFAA no poseen una red de inteligencia que permita prevenir los delitos antes de que sean realizados; ese vacío es subsanado en algunas ocasiones por la gente, que trata de copar el espacio dejado por la falta de liderazgo del gobierno, a través de movimientos como los de las autodefensas. Un departamento como Córdoba, por ejemplo, en el que los campesinos vieron notablemente minadas sus ganancias como consecuencia de las actividades de la guerrilla, tuvo que tomar el camino del paramilitarismo.

“Ante el planteamiento hecho por el Estado, con respecto a la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, los ganaderos estaríamos dispuestos a colaborar siempre y cuando existan los medios para actuar firmemente”.

A principios de la década de los 80 Colombia contaba con 25 millones de cabezas de ganado, en la actualidad, en contravía con el aumento poblacional humano, el país alberga apenas 17 millones de cabezas. En el presente año, han sido hurtadas cerca de diez mil reses, que alcanzan un valor comercial de 5.500 millones de pesos; en 1994 el saldo en rojo por este concepto llegó a los 56 mil millones. Pese a que este total no puede ser endilgado exclusivamente al abigeato guerrillero, buena parte de las compañías ganaderas le atribuyen a la subversión el 60 por ciento de dichos robos.

Adicionalmente, de los 64.147 ganaderos que cuentan con más de cien hectáreas de tierra dentro de sus posesiones, 40 mil fueron víctimas del boleteo y la extorsión el año anterior, viéndose obligados a pagar, en promedio, un millón de pesos cada uno. También en ese período, el secuestro de 500 empresarios del sector costó 75 mil millones, y se calcula que la productividad de la ganadería disminuyó entre quince y treinta por ciento a causa de la falta de control administrativo. Así mismo, los animales no nacidos a causa de la violencia de todo tipo reportan una pérdida de \$72.000 millones, los muertos \$54.000, la carne dejada de producir \$210.000 y la leche \$220.000.

Según el informe presentado por Fedegan en el IV Foro Agropecuario de la Costa Atlántica, efectuado en Barranquilla a comienzos de junio de este año, "la ganadería perdió, a causa del conflicto interno en Colombia, 728.000 millones de pesos en 1994". El 60 por ciento de este total, restando de antemano la cifra por secuestro, es decir \$391.800 millones, sería ocasionado por el factor guerrilla.

Por otro lado, la Asociación de Transportadores de Carga por Carretera -Colfecar- dio a conocer a IRENE las cifras sobre pérdidas por hurto a automotores movilizados de mercancía; este dato afecta indirectamente a todos los gremios, pues cada uno de ellos sufre perjuicios por este concepto. Si bien es cierto que como en los casos anteriores la subversión se reparte con la delincuencia común el total de los asaltos realizados en contra de los transportadores, algunas modalidades como la suplantación de autoridad, el secuestro y la incineración son atribuidas casi por completo a la insurgencia. Teniendo en cuenta ésto, el 35 por ciento del total sustraído queda en manos de la guerrilla.

En los últimos seis años, a partir de 1989, las pérdidas por piratería terrestre ascienden a \$257.315 millones, 90.060 de ellos debieron quedar en manos de la subversión. Sólo en 1994 la cifra general alcanzó los 100.000 millones. Porcentualmente, los productores textiles y de materiales químicos han sido los más afectados, cada uno de estos gremios a asumido doce por ciento del total hurtado en el período antes mencionado; los siguen en su orden los elementos de construcción, con diez por ciento; los víveres con nueve; las drogas con ocho, y los repuestos con seis por ciento.

Por su parte el sector financiero, agrupado en la ANIF, limita notablemente su campo de acción por la misma razón. Además, según Javier Fernández Riva, presidente de la institución, "el transporte de valores, que en algunas zonas debe hacerse por medio de helicópteros, incrementa el costo de operación en 500 por ciento".

El delito del secuestro, que afecta principalmente al sector productivo del país, costó, por pago de rescates, \$175.000 millones entre 1987 y 1991. De los 326 casos de privación de la libertad por parte de la delincuencia que se habían presentado hasta abril de este año, 59 por ciento fueron perpetrados por la guerrilla; este promedio es proporcional al que se presenta en la totalidad de las cifras relacionadas con el delito en mención.

A parte de lo ya referido, se debe tener en cuenta que los gremios económicos invierten una alta suma de dinero en la protección de sus bienes por medio de las pólizas de seguro. Dentro de este entorno económico, el sector asegurador colombiano ha logrado elevados crecimientos en las primas de 1993 -54,6%- y 1994 -42,6%-; en pesos corrientes del año anterior, los ingresos en 1993 fueron de \$1'103.906 millones y en 1994 de \$1'283.831 millones.

En períodos anteriores, el incremento en el número de seguros adquiridos por particulares o por empresas nunca alcanzó los niveles de los dos años anteriores. De acuerdo con algunos funcionarios de Fasecolda -el gremio que agrupa a los aseguradores-, dicho aumento está directamente relacionado con la situación de tensión que vive el país, "cada vez que la guerrilla se acerca más a los centros urbanos, la gente se da cuenta que cualquier inversión que se realice en la protección de sus bienes es necesaria, así, los ingresos de las empresas aseguradoras aumentan, sobre todo en los seguros de vida y en los de daños".

Sin embargo, hay algunos valores que no se pueden considerar como consecuencia de la guerrilla, como los seguros por accidentes personales, seguro obligatorio por accidentes de tránsito, terremoto y aviación, que en el 93 representaron para las aseguradoras ingresos por \$152.515 millones. Los seguros de vida y familiares se han incrementado debido a la violencia guerrillera, al igual que los de daños.

La respuesta unitaria

En los últimos años, el deseo de los habitantes de nuestro país por buscar métodos con los cuales apartarse del conflicto interno es evidente. La huida generalizada hacia los centros urbanos, e incluso hacia Estados Unidos y Europa, es constante. Quienes se ven obligados a permanecer en las zonas agropecuarias, o a mantener sus negocios en aquellos territorios han debido tomar otras medidas.

De acuerdo con el Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, concluido por las Naciones Unidas en 1993, el Partido Comunista Colombiano -PCC- fue el encargado de crear los primeros movimientos de autodefensa en Colombia. El estudio señala que en el XII congreso del PCC, que se realizó el 5 de diciembre de 1975, catalogó a dichos grupos como movimientos populares de masas "en los que tienen cabida todas las personas cuya integridad física e intereses sean amenazados por represión reaccionaria, la voracidad de los latifundistas, la colonización territorial, económica política, ideológica y cultural del imperialismo yanqui".

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que desde los años 60, a la par de los movimientos guerrilleros, fueron evolucionando un buen número de organizaciones extremistas de carácter privado, que poco a poco se ganaron un espacio dentro del apoyo militar internacional. Para que esto se diera fue fundamental la limitante operativa de las FFAA nacionales de esa época, que permitió que los políticos a cargo del poder prefirieran armar "provisionalmente" a los particulares, para que ellos mismos se encargaran de proteger sus intereses.

A partir de la Ley 48 de 1968, que dio pie a la creación del paramilitarismo, los diferentes sectores políticos y económicos del país invierten en la formación de

contingentes de individuos armados, que se encargaran en adelante de proteger sus posesiones. En principio, el vínculo entre las organizaciones para la defensa nacional y las autodefensas es informal; pero cuando la Fuerza Pública y el Ejército empiezan a fallar en los alcances de sus objetivos, los paramilitares se encargan de apoyarlos de manera decisiva, obligándolos a retribuirlos con instrucción y armamento.

Por otro lado, el desarrollo de la subversión, cada vez con más influencia sobre el sector agropecuario, a través de la estafa, el secuestro y el boleteo, fomentó aún más el deseo de los empresarios por constituir pequeños ejércitos privados, que comparativamente les resultaban mucho más económicos que los impuestos que tenían que pagar a los guerrilleros.

En 1988, en el gobierno de Virgilio Barco, la aquiescencia que gozaron los paramilitares de parte del Estado terminó con la promulgación del decreto 815 de 1988, pese a ello, y a que dos años después varias de estas agrupaciones se acogieron a los procesos de dejación de armas que beneficiaban a la guerrilla, su presencia en el territorio nacional no ha concluido. En la actualidad, más de 130 autodefensas operan en el país, principalmente en el Magdalena Medio, en el norte de Córdoba y Antioquia, en el Valle del Cauca, en el Meta y en las regiones vecinas a este departamento en Casanare y Boyacá. También están presentes, con mayores limitantes de acción, en Arauca, Putumayo y el sur del Cesar.

Uno de los asentamientos más fuertes del paramilitarismo ha sido el Magdalena Medio. El surgimiento de los grupos que actúan en dicha zona se dio en 1979, gracias al apoyo que recibieron de parte de los militares colombianos. Más adelante, en momentos en los que Pablo Escobar se encontraba rodeado por las autoridades del Estado en Medellín, el capo solicitó a las autodefensas que lo dejaran entrar al Magdalena Medio para protegerse, ofreciendo a cambio todo el dinero que desearan; no obstante la propuesta fue desechada y Escobar cayó quince días después en la capital antioqueña.

En la actualidad 500 hombres hacen parte del paramilitarismo en esta zona, todos están bajo el mando de Ramón Isaza.

Aunque cualquier cálculo sobre este tema es difícil de corroborar, se puede afirmar, según los datos de diferentes instituciones descentralizadas, de la ONU y de los estamentos gubernamentales, que cada uno de estos grupos cuenta con cerca de cuarenta hombres, que la dotación personal que éstos reciben llega a costar dos millones de pesos, que su salario básico asciende a \$400.000 mensuales y que los gastos en comida y utensilios de aseo al día llegan a los \$10.000 por persona. Basándonos en lo anterior, y sin tener en cuenta el dinero invertido en salud, estadía nocturna y transporte, el capital invertido en el sostenimiento del paramilitarismo anualmente alcanza los \$53.560 millones, cifra superior, por sí sola, a la invertida en el programa de reinserción.

Por otro lado, de acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia Privada, actualmente funcionan en Colombia 408 empresas de celaduría -que en realidad se convierten en cerca de mil al contabilizar por separado sus filiales-, de ellas, 390 tienen permiso para que sus empleados porten armas -revólveres y pistolas calibre 32, escopetas semiautomáticas calibre 12 y carabinas no automáticas calibre 22-, las restantes emplean como mecanismos de defensa los perros y diferentes variantes tecnológicas como gases y aparatos eléctricos que producen diferentes tipos de conmoción. Además, existen 38

La cosa fue con ELN

cooperativas de vigilancia que también cuentan con permiso para manejar armas de fuego.

Cada una de las filiales alberga en promedio cincuenta empleados, lo que nos lleva a un consolidado de 40.000 vigilantes en todo el país. Según una fuente anónima de Indumil, algo más de la mitad de este total de individuos porta alguno de los tipos de armas reseñados anteriormente.

Por otra parte, generalmente las 24 horas de celaduría son cubiertas por dos vigilantes, este servicio tiene un valor mensual de un millón de pesos. Lo anterior indica que las 20.000 parejas de vigilantes cuestan anualmente a la empresa privada y a los colombianos en general la no despreciable suma de \$240.000 millones; a pesar de que la Superintendencia de Vigilancia afirma que la inversión en celaduría obedese en 90 por ciento a la delincuencia común, no se puede desconocer que la inestabilidad social genera también esos tipos de violencia. Sólo con la mitad ese dinero se podrían construir cerca de quince mil soluciones de vivienda para las clases menos favorecidas de cualquiera de las grandes ciudades del país, o miles de escuelas y colegios, o centenares de centros de salud.

? |

Pensar que los acuerdos que se firmen con la guerrilla serán la panacea que solucionará la situación de violencia que aqueja al país está bastante lejos de la realidad. El factor social incide de manera determinante en el no desarrollo de grupos alternos que aspiren a ostentar el poder. Una sociedad funcional, en la que el Estado, los poderes económicos, las fuerzas militares, la insurgencia y el pueblo en general fijen metas pacíficas, dejando a un lado los lineamientos de una eterna guerra para adoptar un nuevo orden, estará muy cerca de abandonar la actual situación de zozobra.

Mientras la economía colombiana siga girando en torno al conflicto armado, la paz no será fácil de conseguir; y mientras el Gobierno y la Guerrilla no estén dispuestos a dialogar para llegar a acuerdos en los que los dos se comprometan a trabajar unidos para acercarse a la paz, sin poner premisas anticipadas de por medio, cualquier conversación resultará infructuosa.

◆◆◆

\Recuadro/

PRESTAMOS EXTERNOS PARA DEFENSA
(cifras en millones de dólares)

Fecha Contrato	Monto Contratado	Prestamistas	Destinación	
1985	12.3	Isrex Israel Gral.	Bienes Serv. Armada	
	2.1	Banque de L'Unión	Equip. Comunic. E.N.	
	3.1	P.I. de Panamá	Material Reserv. P.N.	
1986	29.2	Isrex Israel Gral. Trading	Material reservado P.N.	
	2.2	Soc. Cons. Mec Panh. Lev.	Material reservado E.N.	
	33.5	Israel Aircarft	Modernizacion FAC.	
	21.7	Deutsche Ggirozentrale	Elementos Armada.	
1987	5.1	First Winconsin Nat	Equip. Comunic. P.N.	
	3.0	Mc Donnell Douglas	Helicopteros FAC.	
	17.9	Marubeni Panamá	Equipo P.N.	
	8.1	Midland	Equipo P.N.	
	4.0	Isrex Israel Gral.	Equipo de guerra E.N.	
1988	35.5	First Interstate Bank	Helicóptero FAC.	
	10.3	Isrex Israel Gral.	Plan Emergencia E.N.	
	6.1	Comex	Plan Emergencia E.N.	
	90.3	KFW	Reparac. Equip. Defen.	
	1.0	Banco de Colom. Panamá	Motocicletas P.N.	
	9.6	Arm Scor	Plan Emergencia E.N.	
	0.4	Sidco International S.A.	Plan Emergencia E.N.	
	2.3	NV Philips-Holanda	Equip. med. Hos. Mil.	
	0.7	Hecker Y	Plan Emergencia E.N.	
	200.0	Israel Aircraft Indus.	Compra aviones K-fir	
	1.0	United Scientific	Plan Emergencia E.N.	
	1.2	Deutsche AK	Equip. med. Hos. Mil.	
	2.0	Banque de L'Unión	Comunic. E.N.	
	8.8	C. Itoh	Plan Emergencia E.N.	
	3.2	C. Itoh	162 vehículos P.N.	
	3.2	Comex	Automotores P.N.	
	2.0	C. Itonh	Equip. med. Hos. Mil.	
	10.0	Israel Aircraft Industries	Equipos F.F.M.M.	
	1989	1.0	Isrex Israel Gral.	Material Reserv. P.N.
		1.0	C. Itoh	Sanidad E.N.
1.0		Itoman	Automotores P.N.	
3.7		Union Bank of Switzerland	Red comunicaciones.	
5.0		Banco Santander España	Equip. Fokker Satena.	
6.7		C. Itoh	Plan Emerg. F.F.M.M.	
1.0		DG. Bank Deutsche	Red Comunicaciones.	
5.4		KFW	Red Comunicaciones.	
1.3		Fuji Bank	Material Reserv. E.N.	
73.1		PEFCO	Moderniz. F.F.M.M.	
7.8		Isrex Israel Gral.	Moderniz. F.F.M.M.	
7.1		Isrex Israel Gral.	Equip. Minis. Defensa.	
2.7	C. Itoh	Seguridad Interna P.N.		
4.7	Industrias Mil. Israel	Equipo Minis. Defensa.		
1990	0.7	C. Itoh	Mat. Reser. Ing. E.N.	
	5.1	Armaments Co S. Africa	Plan Emerg. F.F.M.M.	

	3.1	Isrex Israel Gral.	Mat. Reser. trans. com.
	1.1	Defex	Plan Emerg. F.F.M.M.
	0.3	Indicol of America Co	Plan Emerg. F.F.M.M.
	0.2	Lorenson Co	Plan Emerg. F.F.M.M.
	4.4	Israel Aircraft Industries	Suminist. Mat. Reserv.
1991	11.4	Banco Santander España	Bien. y Serv. F.F.M.M.
	0.6	Unitec Scientific	Plan Emerg. F.F.M.M.
	10.4	Isrex Israel Gral.	Plan Emerg. F.F.M.M.
	1.3	C. Itoh	Material Reserv. E.N.
	0.5	EC Associates	Automotores P.N.
	0.4	Armaments Co S. África	Plan Emerg. F.F.M.M.
	5.1	Isrex Israel Gral.	Segur. Inter. F.F.M.M.
	5.7	Siemens Aktiengesell.	Plan Emerg. F.F.M.M.
	0.7	EC Associates	Segur. Inter. F.F.M.M.
	19.9	Gobierno de E.E.U.U.	Moderniz. F.F.M.M.
TOTAL	732.6		

Fuente: Informe Contraloría General de la República.

\Recuadro/

EVOLUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GOBIERNO CENTRAL
(Década del 80; millones de pesos)

Años	F.F.M.M.	P.N.	Salud Pública	Justicia	Educación
1980	124.110	90.610	65840	12546	292.063
1981	124.492	94.008	74.777	12.598	330.387
1982	121.287	91.213	71.974	13.085	342.010
1983	139.091	112.007	71.404	14.778	336.792
1984	124.462	116.286	74.041	15.823	371.593
1985	131.955	121.420	75.566	16.499	366.942
1986	133.899	125.179	79.239	15.606	395.702
1987	150.532	135.251	92.062	16.145	401.993
1988	166.144	147.436	102.521	18.557	414.369
1989	162.689	150.867	112.648	24.118	436.924
1990	198.771	129.153	111.304	24.447	436.015

Fuente: Informes financieros, Contraloría General de la República.

\Recuadro/

**IMPORTACIONES DE ARMAS Y EQUIPOS
MILITARES**

(Millones de Dólares)

AÑOS	TOTAL IMPORT.
1980	4.663
1981	5.199
1982	5.478
1983	4.968
1984	4.492
1985	4.131
1986	3.852
1987	4.228
1988	5.005
1989	5.010
1990	5.589
PROMEDIO	4.783

Fuente: Dane, Anexo 2, Informes Financieros; CGR; y Daniel Gallick, *World Military Expenditures and Arms Transfers 1987*.

\Recuadro/

**DEUDA EXTERNA POR GASTOS MILITARES EN
COLOMBIA**

(Millones de pesos)

AÑOS	SERVICIO DEUDA SECTOR DEFENSA	SERVICIO DEUDA GOBIERNO CENTRAL
1980	679	20.645
1981	1.205	28.158
1982	3.223	37.691
1983	4.372	45.408
1984	3.139	64.839
1985	5.140	85.217
1986	22.208	193.772
1987	40.656	232.824
1988	14.133	341.375
1989	67.308	490.871
1990	135.610	630.988

Fuente: *Colombia y la Crisis de la Deuda*. Luis Jorge Garay Salamanca. Edit. Tercer Mundo.

/Recuadro/**Presupuesto 1995**

Entidad	Asignación
Mindefensa	1.036.030.734.973
Policía Nacional	776.112.321.657
DAS	54.892.894.000
Instituciones Descentralizadas	542.997.764.100
Total	2.410.033.714.730

/Recuadro/

Programa Salto Social 1995-1998
Presupuesto de inversión nacional
(millones de pesos de 1994)

Programas y subprogramas	Asignación
Cultura, deporte y juventud	121.802
Vivienda social urbana	588.916
Plan de agua	359.528
Sector agropecuario	400.864
Gasto total en salud	1.742.098
Educación	1.502.057
Programas especiales de empleo	205.084
Defensa y seguridad	1.015.000

\Recuadro/**Gastos ocasionados por acciones guerrilleras**

Entidades afectadas	Periodo	Monto	Observaciones
Aeronáutica Civil		8.613.386.564	Reposición de equipos.
Ecopetrol (Oleoducto Caño Limón-Coveñas)	1986-may. 1995	1.210.308.088	
Ecopetrol (Oleoducto Vasconia-Coveñas)	1992-jun. 1995	3.925.902	Sin incluir crudo dejado de producir.
Inravisión	1994-jun. 1995	167.000.000	Reparaciones
Telecom	1994-jun. 1995	2.700.000.000	Sin incluir lucro cesante, cerro La Oca
Peajes S.A.	oct. 1993-jun. 1995	80.768.366	Reparaciones
Wackenhut de Colombia	nov. 1992- dic. 1993	71.510.000	Reparaciones
Caja Agraria	1994-jun. 1995	5.000.000.000	Pérdidas

\Recuadro/

Pérdidas y gastos generados por el conflicto

Sector	Periodo	Pérdidas	Seguros	Paramilitares	Vigilancia privada	Secuestro
Minero	1985-1994	590.941.677.803	X		X	X
Ganadero	1.994	391.800.000.000	X	X	X	X
Trans. terrestre carga	1989-1994	90.060.250.000	X		X	X
Agrícola*			X	X	X	X
Financiero*			X		X	X
Totales			951.391.000.000**	53.560.000.000	240.000.000.000**	175.000.000.000**

*Agricultura: Aumento en importación de toneladas de alimentos. 1991: 876.800 ton.; 1994: 3 millones ton.

Financiero: Incremento de 500 por ciento en gastos de operación.

** Participación del resto del sector productivo y el Estado.

Fuentes: Mineralco, Fedegan, Colfecar, SAC, Fasecolda, Organismos de Seguridad, Cálculos IRENE.

\Resaltado/

A través de las dos última décadas el gasto militar en Colombia ha crecido en un promedio anual de 32 por ciento, dato ampliamente superior al incremento por año del PIB, que entre 1990 y 1994 fue de 4.3 por ciento.

\Resaltado/

A través de las dos última décadas el gasto militar en Colombia -entendiéndolo exclusivamente como ministerio de Defensa y Policía- ha crecido en un promedio anual de 32 por ciento -ampliamente superior al incremento por año en el PIB, que entre 1990 y 1994 fue de 4.3- al pasar de \$7049 en 1975 a \$1'812.143.056.630 en 1995.

\Resaltado/

La Caja de Vivienda Militar no aparece dentro del Presupuesto de las F.F.A.A. en 1995, pero a partir de mayo de este año empezó a recibir 3 por ciento del total de sus gastos de funcionamiento, que ascienden a \$180.787 millones, de parte del ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

\Resaltado/

Cada preso le cuesta diariamente a la nación cerca de \$7.000, lo que quiere decir que los 3.100 reclusos considerados de alguna forma como guerrilleros representan un gasto de \$21'700.000 por día, o sea \$7.920'500.000 al año.

\Resaltado/

De los 64.147 ganaderos que cuentan con más de cien hectáreas de tierra dentro de sus posesiones, 40 mil fueron víctimas del boleteo y la extorsión el año anterior, viéndose obligados a pagar, en promedio, un millón de pesos cada uno. También en ese período, el secuestro de 500 empresarios del sector costó 75 mil millones, y se calcula que la productividad ganadera disminuyó entre 15 y 30 por ciento.

\Resaltado/

En 1991 el país importaba algo más de 4 por ciento de sus requerimientos alimenticios, es decir unas 870 mil toneladas, para 1994 la cifra llegó a 15 por ciento, o sea tres millones de toneladas; todo como consecuencia de las migraciones campesinas generadas por el miedo ante el conflicto armado.

\Resaltado/

Sin tener en cuenta el dinero invertido en salud, estadía nocturna y transporte, el dinero invertido anualmente por el sector privado colombiano en el sostenimiento del paramilitarismo alcanza los \$53.560 millones.

Fuentes:

PEAJES S.A, CAJA AGRARIA, COLFECAR, MINMEDIO AMBIENTE, SAC, FENALCO, MINSALUD, MINAGRICULTURA, MINERALCO, REINSERCIÓN, FEDEGAN, PAÍS LIBRE, DAS, CONTRALORÍA, MINDEFENSA, MINEDUCACIÓN, WACKENHUT, DANE, MIN HACIENDA, ANIF, IFI, FASECOLDA, SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA PRIVADA, FEDESARROLLO, AERONÁUTICA, TELECOM, INRAVISIÓN, ISA, FRONTINO GOLD MINES, ESTRATEGIA ECONÓMICA, ECOPETROL, ACOPI, ANDI, ONU, ASOC. COL. DE JURISTAS, INDUMIL, INVESTIGADORES U. ANDES Y U. NACIONAL.